

Desarrollo capitalista o campesino en el campo mexicano

ARTURO WARMAN*

Desde el triunfo de la Revolución mexicana dos corrientes se han enfrentado para tomar la dirección del proceso de desarrollo de la agricultura del país. Para una de ellas, el modelo debió y debe orientarse por el camino del capitalismo. Para la otra, debió encaminarse por una vía distinta, no capitalista o campesina. En las dos corrientes se ha expresado una pluralidad ideológica. La vía capitalista no sólo ha sido defendida por la derecha, como sería evidente y

natural, sino que a veces ha sido tomada por posiciones de izquierda; y al revés: la ruta campesina, supuestamente radicada en la izquierda, también ha sido adoptada por reaccionarios y conservadores. Esta pluralidad confunde, desconcierta y hace remota la posibilidad de salir sin mancha y libre de culpa del debate. En este ensayo intento (hasta donde es posible, y lo es muy poco) ignorar la pluralidad ideológica para llevar la discusión al terreno de lo factible, haciendo caso omiso de lo deseable.

* Ponencia presentada en el Coloquio sobre Economía Mexicana, organizado por el Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de México del 26 al 30 de marzo del presente año.

Los planteamientos de cada corriente han variado en el tiempo y en el espacio. Ni los argumentos ni los modelos

para impulsar la marcha por la vía escogida son estáticos. Antes de la Revolución, el modelo capitalista se expresaba en el de la hacienda modernizada. Lo sustituyó el ideal del pequeño propietario emprendedor y eficiente, el *farmer* colonizador con el que el presidente Calles quería formar la clase media rural. El neolatifundio, la integración por la vía de la inversión como sustituto de la propiedad territorial, surgió como otro proyecto posible. Incluso se propusieron, dentro de la vía capitalista, algunas concepciones colectivas, en las que el objeto de la asociación era la formación de una empresa capitalista. En cierta medida, cada uno de los modelos incluía al anterior e intentaba superar sus limitaciones. El nuevo modelo, el contemporáneo, también tiene esa pretensión: los grandes complejos agroindustriales de propiedad mixta, que todavía no se expresan con nitidez, pretenden actualizar el potencial de la vía capitalista para el desarrollo de la agricultura.

En la otra vía, los modelos no se sustituyen con tanta rapidez y se centran en la propiedad corporativa de la tierra con un margen de autonomía para decidir sobre su uso. Esta relativa inmovilidad en cuanto al modelo puede explicarse en dos direcciones. Bajo el enunciado general del modelo se presentan muchas variedades de organización posible. De hecho esa multiplicidad de formas autónomamente elegidas constituye el modelo y sólo se generaliza el marco político-jurídico que las haga viables. Por otra parte, esa aparente inmovilidad está necesariamente relacionada con el hecho de que este modelo ha estado sometido a los de carácter capitalista, con los que interactúa intensa y constantemente. La subordinación otorga a los modelos no capitalistas un carácter defensivo. Dicho de otra forma, el modelo campesino no ha caducado en tanto que no ha logrado el dominio, en tanto que es un programa que permanece vigente en sus aspectos esenciales.

Los dos modelos forman parte de una estructura única que los integra de manera contradictoria. Esa dependencia simbiótica explica, en gran medida, que la lucha no haya sido de exterminio sino de dominio, en la que se busca someter más al modelo contrario. Así, por ejemplo, el *farmer* o el neolatifundista no pretendían aniquilar a la comunidad agraria, de la que obtenía recursos esenciales para sus propios propósitos: tierra, agua y especialmente mano de obra. En sentido contrario, la comunidad agraria no pretendía la desaparición de la empresa capitalista, que le ofrecía —a un costo muy alto— recursos de capital, tecnología y mercado de trabajo, esenciales para su permanencia en posición subordinada. Sólo en momentos especiales la lucha ha planteado la eliminación del contrario. Así sucedió durante el porfiriato, cuando los hacendados pensaron que podrían controlar todo el territorio nacional y su producción, con el apoyo de un sistema completo de represión jurídica y física por parte del Estado. Su fracaso, por la oposición de los campesinos alzados en armas, llevó a otro momento de excepción. Durante la Revolución, los grupos más radicales, sobre todo los zapatistas, propusieron y llevaron a la práctica, en condiciones limitadas, la eliminación de la empresa capitalista y la implantación de un modelo campesino en posición hegemónica.

El momento actual parece también corresponder a una

situación especial, en el sentido de que los impulsores del proyecto capitalista anuncian su posibilidad y disposición para eliminar al sector campesino. Su programa se basa en circunstancias novedosas y en viejas alianzas políticas. Entre las novedades está el hecho de que el desarrollo agropecuario puede concebirse hacia el futuro como un programa de sustitución de importaciones, repitiendo la experiencia de la industria 30 años antes. Detrás de este supuesto está otro: que la relación de intercambio externo del país será favorable y que se contará con un excedente de capital. Es decir, que habrá una transferencia de recursos hacia la agricultura, revirtiendo la relación histórica en que aquella remitió capital en beneficio de los sectores secundario y terciario de la economía nacional e internacional. A partir de esas hipótesis se plantea la posibilidad de extender la empresa capitalista hasta su dominio absoluto, mediante la mecanización y la integración en escalas grandes y adecuadas. Esta pretensión de posibilidad, ya que no puede ponerse en duda la disponibilidad, es el objeto del presente ensayo.

La principal exigencia del proyecto capitalista consiste en el control sobre la tierra. Esto se expresa con frecuencia como una demanda de liberación de los límites impuestos a la propiedad, aunque también se manifiesta en formas más sutiles, como sucede en la actualidad, cuando se piden nuevas formas de asociación entre las diversas modalidades de la tenencia. El principal argumento en esta dirección es que los límites a la propiedad impiden la integración de empresas eficientes con una escala que permita maximizar los rendimientos y las ganancias. Las explotaciones minifundistas registran sistemáticamente resultados inferiores a los de la explotación modernizada de gran escala y son las causantes de la crisis en el sector agropecuario. Si se lograra igualar el rendimiento de la superficie minifundista o campesina con el de la empresa, el país sería no sólo autosuficiente sino que fortalecería su capacidad como exportador. Esto sólo puede lograrse entregando el terreno a las empresas capitalistas. En apoyo de los argumentos se ofrecen cifras como ésta: la octava parte del total de los predios, los empresarios capitalistas, aportaba la mitad del valor de la producción agrícola en 1970; en la actualidad tal vez la proporción se haya incrementado. El resto (los otros siete octavos) está, nos dicen, hundido en la ineficiencia.

Esta argumentación puede contradecirse de varias maneras. Su omisión más importante es que no toma en cuenta la calidad de la tierra. En las condiciones actuales, la mayor proporción de la superficie que queda fuera del control de los empresarios no sería cultivada por éstos. Cuando menos la mitad —probablemente mucho más— de la tierra en que producen los campesinos no es apta para el desarrollo de la empresa capitalista, que se rige por la búsqueda de la ganancia. La principal limitación es la falta de agua de lluvia, que es escasa y errática en buena parte de esas tierras. Se siembra en ellas sin que haya ninguna seguridad de obtener una cosecha. Para el empresario capitalista ese riesgo es inaceptable. Todos los elementos de la producción tienen para él un costo (son mercancías que adquiere en el mercado) que debe recuperar con creces. Las labores de preparación, los insumos y el trabajo para sembrar significan una inversión que necesita recuperar dentro de ciertos márgenes de seguridad. Esas tierras no los ofrecen en la situación

actual. No constituyen una base para el negocio redituable en un país donde el costo del dinero es tan elevado.

Los campesinos, en cambio, cultivan año tras año esas tierras. Obtienen rendimientos muy bajos y a veces ni siquiera obtienen un producto. Lo hacen porque tienen una motivación distinta y lo que "invierten" se comporta para ellos de una manera diferente. La motivación central, aunque no la única, es la de obtener un satisfactor esencial para la sobrevivencia. Por eso casi toda esta superficie se siembra de maíz, que en una buena proporción será consumido directamente por los productores. Lo que éstos "invierten", básicamente su propio trabajo y el de los que con ellos conviven, no tiene un costo. Casi siempre ni siquiera tiene posibilidades de encontrar otra ocupación productiva o remunerada fuera de las tierras propias. Se trabaja para obtener un elemento esencial de la subsistencia y la remuneración del propio trabajo se mide dentro de esa escala, que, además de ser muy flexible, siempre queda por debajo del precio del trabajo en el mercado laboral. Si se quiere, se puede decir que los campesinos trabajan las tierras marginales porque no tienen otro camino. Aun así, el efecto complejo y agregado de la producción obtenida en esas tierras es grande y es de enorme importancia para el país. Conforme a un cálculo muy modesto y en extremo conservador, cuando menos 40% de la producción de maíz se obtiene en tierras marginales y sin el uso de insumos comerciales, con rendimientos 30 o 40 por ciento inferiores al promedio nacional. El costo de sustituir ese volumen por importaciones andaría en la actualidad por los 500 millones de dólares. Pese a la magnitud de la cifra, esta cuenta es en extremo simplista. El país no dispone de infraestructura apropiada para manejar un volumen semejante. No hay puertos, ferrocarriles ni almacenes para mover y guardar esas magnitudes. No hay un sistema de distribución capaz de hacer llegar el maíz a los consumidores. Acaso, y pese al petróleo, tampoco se dispone del dinero para seguir este camino. En un plazo previsible, no puede renunciarse a la producción campesina de granos, en especial de maíz, ni la empresa capitalista puede sustituirla por el simple recurso de apropiarse del control sobre la tierra.

Aparte de la frontera obvia que significa la sequía o la extrema irregularidad de las lluvias, hay otras razones que imposibilitan que la empresa, con sus objetivos y recursos para lograrlos, incorpore la tierra que hoy cultivan los campesinos. La pendiente del suelo en las zonas montañosas con buen temporal, que con frecuencia supera los 45 grados y a veces llega a los 70, constituye un límite que los empresarios no pueden superar con la maquinaria y la tecnología de que disponen. En esas tierras sólo es posible trabajar a mano y con instrumentos considerados primitivos y con períodos largos de "descanso" para la tierra. También pueden construirse, con una enorme inversión de trabajo, pequeñas terrazas agrícolas en las que se obtienen elevados rendimientos en pequeña escala. En estas zonas los campesinos no sólo siembran maíz sino que obtienen cultivos comerciales de flores, frutas y legumbres que significan proporciones importantes del abasto del mercado nacional. El monto de esta producción es, para efecto de cálculo, desconocido. Escapa de la estadística por su poca importancia y por la diversidad de formas con que llega al mercado, pero basta analizar el origen de los productos en

los centros urbanos de consumo para descubrir su enorme importancia.

La pendiente, la ausencia de suelo en la península de Yucatán, los cultivos de vegas en los torrentes del desierto y otras condiciones similares por todo el país, escapan de las posibilidades de la empresa por razones tecnológicas. Los paquetes técnicos de que dispone la empresa son sumamente limitados por su especialización. Requieren de condiciones que, por lo general, no se presentan en muchas de las tierras en que trabajan los campesinos. La pequeña escala no está determinada en este caso por la propiedad sino por los mismos recursos. El uso intensivo de la mano de obra no tiene sustituto mecánico en esas condiciones. La tecnología empresarial está concebida e incorporada para aprovechar condiciones en que el trabajo humano constituye el factor escaso y crítico cuya productividad debe incrementarse. En muchas áreas esta intención no puede cumplirse. Desde un punto de vista técnico, la empresa no tiene solución y su opción se limita a abandonar el aprovechamiento de estos territorios o a cambiarlo radicalmente por la explotación extensiva ganadera. Esta sustitución de superficies cultivadas por potreros ha venido sucediendo y es uno de los factores causales de la crisis agrícola contemporánea.

La ganadería, que constituye la inversión predilecta para la acumulación de capital en el sector agropecuario en el último decenio, ilustra la contradicción respecto al uso del suelo entre el capitalismo y los campesinos. La ganadería extensiva para la producción de carne de bovino es acaso la actividad que requiere menos uso de mano de obra por unidad de superficie. Necesita, en cambio, una inversión de capital relativamente alta, concentrada en el ganado mismo, y una superficie grande de tierra para convertirse en la actividad agropecuaria más redituable. Esto también requiere de una condición externa que se da en el mercado. Mientras que la mayoría de los productos agrícolas, sobre todo los cereales, tiene precios bajos y generalmente controlados por la acción oficial, el precio de la carne es alto, está ligado a los mercados internacionales y carece de control. Para ser redituable, el tamaño de la explotación mínima puede fijarse por arriba de las 200 hectáreas en las zonas de muy buena y bien distribuida precipitación pluvial en el trópico. La escala y la inversión de capital están muy por encima de las posibilidades de los campesinos. El producto mismo, la carne, no puede constituir la base de la subsistencia por su precio y su muy difícil conservación. La fuerza de trabajo campesina excede las posibilidades de ocupación que demanda la ganadería. En las condiciones del México contemporáneo, hay una oposición irreductible entre campesinado y ganadería extensiva. Sin embargo, en toda la zona tropical, el crecimiento de la ganadería ha sido promovido y protegido por la acción oficial y aprovechado por los particulares que lograron controlar el territorio. La agricultura está severamente restringida y los campesinos de las zonas tropicales están amenazados con más rigor.

El efecto agregado de esta situación explica en parte la crisis en el abasto de productos básicos, mientras que crece espectacularmente la producción ganadera y su participación en el mercado exterior. La necesidad territorial de la empresa capitalista, con las severas limitaciones que le impone su

objetivo de obtener una ganancia y la tecnología que dispone para lograrlo, implica la proyección extrema de esta tendencia en que una gran parte del territorio productivo sería abandonado, o alterado el propósito de su uso.

Esto mismo puede mostrarse de manera diferente. Las empresas capitalistas (la séptima parte del total, que generaba casi la mitad del valor de la producción) controlaban en 1970 42% de la superficie de labor, 48% de la de riego, la mitad del capital, las tres cuartas partes de la maquinaria y las dos terceras partes del agua para riego. Estas cifras, tomadas de una agregación del censo de 1970 hecha por Iván Restrepo, resultan conservadoras. En primer lugar, se refieren sólo a las superficies legalmente poseídas, que no incluyen la simulación agraria, que aumentaría el patrón de concentración, ni los arrendamientos u otras formas no legales de control, que agrandarían las superficies incorporadas por la empresa capitalista. En segundo lugar, estos datos no hacen referencia a la calidad de los recursos sino sólo a su número. Es claro que esas cifras incluyen las mejores tierras por la calidad del suelo, las más cercanas a las vías de comunicación y a los centros de mercado y las mejor acondicionadas para aplicar la tecnología empresarial, generalmente resultado de la inversión pública en el campo. De hecho, la agricultura capitalista ya controla casi todos los recursos que favorecen su funcionamiento. Son muy pocos los que quedan fuera de su dominio y éstos son cada vez menos adecuados, de menor calidad y requieren mayores inversiones para equipararse a los que actualmente disfruta esa actividad. Su expansión hacia estos territorios implicaría, bien ganancias decrecientes, bien otros usos altamente reutilizables, pero con bajo índice de intensidad. Dicho de otra forma, la entrega de la tierra a la empresa capitalista no supone automáticamente, como ellos pretenden, un uso más racional ni una mayor productividad; en cambio, sí entraña mayores ganancias. Esto no coincide con las necesidades nacionales ni con el desarrollo histórico inevitable, como lo sustentan los voceros de esta vía de crecimiento.

Las consecuencias de la expansión del capitalismo en la agricultura no se limitan al uso de la tierra y al tipo de producción, sino que afectan al conjunto de la vida rural. Su expresión más severa se da en el empleo. La tecnología basada en la mecanización se construye alrededor de incrementar la productividad del trabajo o, al revés, de eliminar hasta donde sea posible los salarios como factores del costo. Con apoyo en la fuente mencionada, puede afirmarse que, para producir la mitad del producto agropecuario, la empresa agrícola ocupa sólo 20% de la fuerza de trabajo dedicada al sector primario. De esta cifra, a más de la mitad se le emplea eventualmente por períodos de corta duración para fases específicas del cultivo. Agregando los dos tipos de empleo, no más de 15% de la fuerza de trabajo encuentra ocupación permanente en el sector capitalista de la agricultura. Si proyectáramos esta cifra al total de la producción agropecuaria, sólo se emplearía 30% de la oferta de trabajo. Sin embargo, esta proyección no sería válida, ya que la expansión de la empresa no utilizaría el territorio (o lo haría de forma más extensiva) donde hoy se ocupa parcialmente el total de la mano de obra. De satisfacerse las pretensiones del capitalismo en el campo, alrededor de 20% de la población ocupada en el sector agropecuario encontraría trabajo. Con-

forme al censo agropecuario de 1970 esto implica que de los ocho millones de personas ocupadas en el sector, seis millones y medio tendrían que encontrar trabajo en otras actividades económicas.

Es claro que el país, independientemente de su tasa de crecimiento en los sectores secundario y terciario, no tiene capacidad de ocupar a esta fuerza de trabajo en plazo previsible. Aunque se disponga de capital en montos nunca antes imaginados, la misma lógica del crecimiento industrial, en la que también opera y con mucho más fuerza la tendencia a incrementar la productividad del trabajo mediante inversiones de capital, imposibilita la absorción de esta fuerza de trabajo. Creo que no es erróneo afirmar que hay una barrera estructural definitiva contra la transferencia, en plazos previsible, de la fuerza de trabajo ocupada en la agricultura a otras actividades económicas.

El grupo más grande de la fuerza de trabajo en la agricultura está compuesto por los campesinos minifundistas y sus familias: cinco y medio millones, de un total de ocho millones ocupados en la agricultura, conforme al censo de 1970, es decir, por los beneficiarios de la reforma agraria. Su situación es peculiar. La inmensa mayoría está obligada a cultivar las tierras que para la empresa son marginales o están fuera de sus posibilidades tecnológicas. En esas tierras invierten sobre todo trabajo que tiene una productividad muy baja, cinco veces inferior a la que se logra en la empresa agrícola. Esa baja productividad no es el resultado inherente de la calidad de la fuerza de trabajo, que en parte es la misma que en el sector capitalista nacional logra cinco veces más y acaso veinte o treinta veces más cuando se trata de los trabajadores migratorios. Las condiciones que determinan este resultado están en la calidad de los recursos territoriales de que disponen los campesinos, en la carencia de recursos de capital, en la falta de apoyos por parte del sector público, en su posición desventajosa frente al mercado, en que parte importante de su producción se la apropiarán y la transferirán los intermediarios, los usureros y otros agentes de explotación. . . En fin, están en el conjunto de las relaciones de producción de un grupo subordinado. Estas mismas relaciones determinan que la producción autónoma de los campesinos no sea suficiente para cubrir la subsistencia y la reproducción social del grupo. Como productores autónomos obtienen y logran conservar la parte más importante de su subsistencia, casi siempre una proporción importante de la dieta alimenticia, pero no el total. Tienen que recurrir a otras actividades para conseguir el complemento. La más importante de estas actividades es la venta de fuerza de trabajo.

La presencia de un grupo que vende temporalmente su fuerza de trabajo para obtener un complemento a su propia producción se refleja en los precios del salario. En el sector agropecuario los salarios están por abajo del costo de vida, y por supuesto por abajo de los mínimos legales, ya que cubren sólo un complemento. Este nivel de los salarios permite el cumplimiento de los objetivos de la empresa capitalista en las actividades en que ésta es competitiva, en los productos de exportación en que los salarios representan una proporción importante del costo. Cuando no usa ampliamente del trabajo barato, la empresa capitalista sobrevive y

gana dinero gracias a los subsidios del sector público, como en el caso de los productos básicos, con precios internos más altos que los del mercado internacional.

La paradoja tampoco puede explicarse por incapacidad intrínseca del empresario mexicano sino por las condiciones en que opera. La tasa media de ganancia que el empresario debe lograr está muy por encima de la que debe obtenerse en los países capitalistas en virtud del costo del dinero en países como México. Los precios de la maquinaria, los insumos y muy especialmente el financiamiento, están también muy por encima de sus precios internacionales. Estas desventajas de grandes proporciones sólo se pueden compensar por el bajo costo de la mano de obra en los cultivos en que ésta es un componente central del costo y en que no puede ser técnicamente sustituida por maquinaria. Esta ventaja se complementa con la que ofrecen las tierras arrendadas a los campesinos por debajo de su precio y con los beneficios derivados de la acción y la inversión públicas en el campo que han sido capturados por la empresa. Cuando no existe el diferencial en el costo de la mano de obra tiene que reclamarse más activamente la transferencia de tierras y el subsidio gubernamental.

La demanda de ampliar hasta generalizar el capitalismo en el campo constituye una exigencia para incrementar los subsidios a la empresa: el traspaso de tierra gratuita o a costos muy por abajo de su valor en un mercado de competencia, el acondicionamiento de las nuevas tierras, básicamente mediante el riego, para que puedan incorporarse al cultivo y a la producción que el país requiere. También muchos otros subsidios a través de los precios, el crédito y los insumos. Un último subsidio global para mantener bajo el precio de la mano de obra, ya que de otra manera se abandonarían los cultivos que la requieren con intensidad. Estas son exigencias implícitas tras la generosa oferta de satisfacer el abasto nacional, de superar la crisis agrícola en un plazo breve. El precio social de esta vía es la expulsión del grupo campesino del campo hacia áreas y actividades que no pueden absorberlos.

La vía campesina no es sencilla ni carece de problemas. La posibilidad de aumentar la producción de este grupo está condicionada por varios hechos alrededor de un problema central: el incremento sólo se dará si los productores conservan una proporción creciente del excedente en su propio beneficio. Es ilusorio pensar que los campesinos volverán a aumentar su producción simplemente para transferir el excedente adicional a otros grupos. La crisis agrícola mostró que esa posibilidad, que se había dado en el pasado, no podía prolongarse indefinidamente. La polarización generó sus propios puntos de fractura. Los campesinos redujeron hasta donde les fue posible su participación como productores en el mercado, al enfrentarse a una situación en la que cualquier aumento del volumen comercializado era intrascendente desde el punto de vista del ingreso monetario. La intermediación, la usura y el acaparamiento, en condiciones en que los precios de los productos campesinos eran desventajosos, hacían irracional la producción adicional de artículos básicos. En primera instancia, el incremento de la producción campesina requiere de una corrección en la estructura de precios, acompañada de una transformación radical de los mecanis-

mos de comercialización que impida que el aumento de los precios sea capturado por los intermediarios.

Este primer requisito puede tener un efecto inmediato, aunque limitado, en virtud de los recursos con que cuentan los campesinos para incrementar su producción. Los campesinos elevaron su producción históricamente no sólo con más intensidad en el trabajo sino también incorporando insumos externos, sobre todo fertilizantes. La mayor intensidad en el trabajo y los costos monetarios requirieron financiamiento. Esta necesidad fue cubierta por usureros, que a la vez eran intermediarios, y que se apropiaban de la mitad de la cosecha desde antes que ésta se produjera. La eliminación de esta relación de producción por medio de nuevas formas de financiamiento de insumos constituye un segundo requisito.

La baja productividad del trabajo campesino está acentuada por el sistema de precios, de intermediación y de financiamiento, pero se deriva del tipo de recursos territoriales que controla. La recuperación de las tierras aptas para una agricultura intensiva de mano de obra es necesariamente el requisito central para mantener un crecimiento de la producción campesina. Esto exige que la inversión pública se dirija hacia este grupo en el futuro y que la política agraria se dedique a reparar la mala distribución derivada del pasado.

Si estas condiciones se cumplieran, la oferta de mano de obra campesina disminuiría en la medida en que aumentara su ocupación en la producción autónoma y se encarecería, ya que el complemento del salario no sería indispensable y tendría que tener una remuneración similar a la que el campesino obtuviera en su propia producción. Al incrementarse la productividad del trabajo campesino su remuneración se elevaría y el flujo de fuerza laboral, empujado hoy por el diferencial, tendería a disminuir.

Estas condiciones no son novedosas y el Estado ha creado organismos para tratar de llevarlas a la práctica. Ha fracasado porque el esfuerzo ha sido débil y errático, cuando no demagógico, pero sobre todo porque el grupo dominante ha podido capturar los recursos en su propio beneficio. Hay pues otro ingrediente que debe modificarse: la fuerza política de los sectores, en la que desempeña un papel central la acción del Estado, que no es neutral sino parte actuante. El Estado no puede alegar que los empresarios lo han engañado o defraudado cuando su acción los ha favorecido de manera sistemática.

El conjunto de los requisitos para un desarrollo continuo de la producción campesina requiere una transformación de las relaciones de producción en el campo. Esta es cuando también exige que se modifiquen las relaciones de producción. Ambas tienen costos sociales y políticos elevados. Sin embargo, esto no las hace iguales: una corresponde al grupo mayoritario y otra a uno diminuto; empero, este último tiene poder y se encuentra en posición dominante. La solución no está en el terreno de la racionalidad técnica sino en el de la confrontación política. Mantener el estado de cosas no implica sostener la estabilidad sino un equilibrio precario que puede alterarse con violencia y sin aviso. □